

en cuestiones de desplazamiento interno en Kenia. Jacqueline M. Klopp (jk2002@columbia.edu) es profesora ayudante de Relaciones Internacionales Públicas en la Escuela de Relaciones Internacionales Públicas de la Universidad de Columbia. Ambas ofrecen apoyo gratuito a la

Red de Desplazamiento Interno. Para obtener más información sobre el desplazamiento interno en Kenia, visite el sitio www.internal-displacement.org

1. Según el Observatorio de Desplazamiento Interno www.internal-displacement.org
2. Jacqueline M. Klopp, "Conflictos étnicos y victoria

- electoral" (Ethnic Clashes and Winning Elections'), Revista canadiense de estudios africanos (Canadian Journal of African Studies), 35 (2) 2001: 473-517.
3. www.nckc.org
 4. www.khrc.or.ke
 5. www.irinnews.org/report.aspx?reportid=62757, www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8968.doc.htm
 6. www.knchr.org

Las dimensiones olímpicas del desplazamiento inducido por el deporte

por Jean du Plessis

Los Juegos Olímpicos han desplazado a más de dos millones de personas en los últimos 20 años, afectando de manera desproporcionada a grupos concretos, como los sin techo, los pobres, los romaníes y los afro-americanos. Los mega-eventos como los Juegos Olímpicos suelen dejar un legado inmobiliario negativo para las poblaciones autóctonas.

Los investigadores del Centro sobre el Derecho a la Vivienda y los Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra y respaldado por la Red Internacional Universitaria de Ginebra (RIUG/GIAN),¹ han estudiado siete ciudades que han sido o serán sede de unos Juegos Olímpicos. Su informe muestra que poco ha cambiado desde que 720.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en Seúl, Corea del Sur, en los preparativos de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988.

En Beijing, las autoridades están despejando grandes áreas de distritos residenciales ante la celebración de los Juegos de 2008. 1,25 millones de personas ya han sido apartadas de sus hogares y se calcula que otras 250.000 estarán desplazadas para cuando comiencen los Juegos en agosto de 2008. Estas cifras no incluyen los 400.000 inmigrantes, aproximadamente, que viven "temporalmente" en 171 barrios en condiciones de extrema inseguridad, llegados a Beijing por la falta de oportunidades de subsistencia en las zonas rurales. Los representantes legales y los defensores del derecho a la vivienda que se oponen o cuestionan los desalojos forzosos están sujetos a intimidaciones constantes, acoso y, en algunos casos, encarcelamiento por su activismo. Los desahucios de Beijing suelen incluir la demolición total de las viviendas de personas pobres. Así, se obliga a los habitantes a reubicarse lejos

de sus comunidades y lugares de trabajo con redes de transporte inadecuadas, lo que incrementa de manera significativa su coste de vida. En Beijing, y en China en general, el proceso de demolición y desalojo se caracteriza por la arbitrariedad y la falta de garantías legales. En muchos casos, los inquilinos no reciben notificación de su desahucio o la reciben con muy poca antelación y tampoco perciben la indemnización prometida. En ocasiones, esta falta de indemnización adecuada (o de indemnización simplemente) pone a los desahuciados en riesgo de no tener vivienda y de sufrir una pobreza rampante. A menudo, los desalojos forzosos son violentos y se ha multiplicado el número de abusos cometidos durante los procesos de desahucio.

El informe también aborda el impacto sobre la vivienda que tienen otros mega-eventos como la Copa Mundial de la FIFA, Expos mundiales, conferencias del FMI/Banco Mundial e incluso concursos de belleza, como los de Miss Mundo y Miss Universo. Muestra cómo causan, directa e indirectamente, varias violaciones del derecho a la vivienda (como los desalojos forzosos); el aumento del coste de la vivienda (que lleva a la imposibilidad de adquirirla); reducciones en el número ofrecido de viviendas sociales, estatales y de bajo coste; la discriminación contra minorías y los pobres; la tipificación como delito de la carencia de vivienda; la expropiación de la propiedad

privada y la falta de transparencia y la exclusión de los residentes indígenas en la toma de decisiones.

Ahora, cinco años antes de que Londres acoja los Juegos Olímpicos de 2012, más de 1.000 personas ya se enfrentan a la amenaza del desplazamiento fuera de sus hogares y los precios de la vivienda están subiendo vertiginosamente. Es evidente, incluso en esta fase temprana, que la construcción de los locales y las instalaciones para los Juegos afectarán de manera desproporcionada a los pobres, los que tienen escasos ingresos, los residentes en viviendas del Estado y las minorías étnicas, como los gitanos y los neo-hippies que viven en caravanas.

Unos 2.700 romaníes se vieron directamente perjudicados por la preparación y la celebración de los Juegos Olímpicos en Atenas. Para los romaníes, los Juegos Olímpicos sirvieron para agravar la discriminación y la marginalización que ya sufrían, ocasionando más segregación, desalojos forzosos violentos y dificultades para gozar de condiciones de vida adecuadas y dignas.

Aproximadamente 30.000 residentes pobres fueron apartados de sus hogares en Atlanta por el aburguesamiento de los barrios, la demolición de las viviendas estatales, la especulación con los alquileres y los proyectos de renovación urbana asociados con los Juegos Olímpicos. Alrededor de 2.000 casas estatales fueron derribadas y casi 6.000 residentes quedaron desplazados. Los afro-americanos se vieron afectados de manera desproporcionada por los desplazamientos. Además, la tipificación como delito de la carencia



de vivienda fue una característica clave de los Juegos de Atlanta en 1996.

COHRE insta al Comité Olímpico Internacional (COI) y otros organismos que regulan mega-eventos a que integren plenamente los factores del derecho a la vivienda en los criterios de selección a la hora de evaluar las candidaturas para albergar un mega-evento. Los

organizadores deben incorporar, de manera transparente, consideraciones sobre el derecho a la vivienda en todos los aspectos de la preparación y la celebración de los eventos. Las directrices que hemos preparado esbozan las oportunidades para promover legados inmobiliarios positivos que puedan disfrutarse mucho después de que hayan terminado los eventos. Estas directrices exhortan a los gobiernos, las autoridades municipales, los organizadores, los comités de candidaturas e incluso los patrocinadores corporativos a:

- estudiar, controlar y evaluar las repercusiones en la vivienda, posibles y reales, de los mega-eventos
- evitar que las poblaciones existentes de personas sin techo se vean afectadas
- garantizar que la celebración de un mega-evento contribuye a la existencia

de mercados inmobiliarios estables y al suministro de viviendas asequibles

- utilizar los mega-eventos como una oportunidad para proporcionar viviendas sociales, estatales y de bajo coste y para mejorar el número de viviendas existentes
- hacer que los violadores del derecho a la vivienda rindan cuentas y asegurar la disponibilidad de recursos para las víctimas

Jean du Pressis es el Director Ejecutivo en funciones de COHRE. Si desea obtener más información, póngase en contacto con la Directora de Prensa de COHRE, Radhika Satkunanathan (media@cohre.org). El informe, las directrices y el material de referencia de 'Juego limpio por el derecho a la vivienda' sobre las ciudades olímpicas estudiadas se encuentran disponibles en www.cohre.org/mega-events

1. www.ruig-gian.org

Pancarta gigante colgada en las casas ocupadas de Broadway en Sidney, Australia.

Un extraño intercambio de refugiados entre Australia y EE.UU.

por David Holdcroft

En abril, el ministro de inmigración australiano, Kevin Andrews, anunció que, en un acuerdo alcanzado con los Estados Unidos, Australia 'intercambiaría' hasta 200 refugiados cada año.

Según el plan, los solicitantes de asilo que se encuentren actualmente en la isla de Nauru pueden optar al reasentamiento en EE.UU. si se les reconoce como refugiados. Al mismo tiempo, los refugiados cubanos y haitianos que, en la actualidad, se hallan retenidos en la bahía de Guantánamo serán realojados en Australia. El gobierno estadounidense es el primero en haber emprendido el reasentamiento de un gran número de refugiados de Nauru. Kevin Andrews describió la decisión como disuasoria, argumentando que "el posible reasentamiento en EE.UU. constituirá un freno a aquellos que quieren venir a Australia ilegalmente porque tienen amigos aquí".

Según la 'solución del Pacífico', los solicitantes de asilo que viajen por mar, pero no alcancen tierra firme australiana, son conducidos a centros de

detención dirigidos por la Organización Internacional para las Migraciones, contratada por el gobierno australiano, en la isla de Nauru y en la de Manus en Papua Nueva Guinea. Concebidos para evitar que los solicitantes de asilo realicen peticiones en tierra firme, los centros niegan a los refugiados el acceso al sistema judicial australiano. Si bien el gobierno australiano ha repetido que no permitiría entrar en Australia a estas personas, aproximadamente el 96% de los refugiados que han sido sometidos a este método han acabado en dicho país o en Nueva Zelanda. Es evidente que se trata de una forma de tramitar las solicitudes de asilo enrevesada, potencialmente perjudicial y extremadamente cara.

Es difícil entender la lógica del comunicado entre EE.UU. y Australia desde cualquier punto de vista. El objetivo

principal de la política de refugiados parece ser el control de las fronteras, más que la preocupación por la protección de los que llegan sin papeles. Si esta práctica se produce a costa del debido proceso jurídico y de los derechos humanos, acabará por ser contraproducente. El sistema de protección de los refugiados puede y debe tener en cuenta los movimientos no regulados a través de las fronteras de las personas que buscan asilo. Adoptar estas medidas extraordinarias por un reducido grupo de solicitantes de asilo es indigno y completamente injustificado. Uno no puede sino pensar que esta política también está diseñada para 'dividir a la fuerza' al lobby de los refugiados en Australia, al presentar a EE.UU. como un destino aceptable para el reasentamiento; no obstante, es el proceso por el cual Australia llega a esta conclusión lo que resulta pernicioso. Debemos comenzar a buscar otras opciones más sensatas y humanas.

David Holdcroft (davidhsj@zipworld.com.au) es el director del Servicio Jesuita para Refugiados, Australia.